



# M MAYORÍAS, MINORÍAS Y SOSTENIBILIDAD: GENERACIONES FUTURAS Y DEMOCRACIA<sup>1</sup>

MARÍA JOSÉ GUERRA PALMERO

La intención en este artículo es poner de manifiesto cómo el manejo que se está haciendo en el actual debate sobre el proyecto del puerto industrial de Granadilla revela el desconocimiento más absoluto de la llamada cuestión ambiental y del desafío que las reflexiones en ética y política ecológica suponen para la comprensión clásica de la democracia. Este desconocimiento se refiere a la misma idea de sostenibilidad, o si quieren ustedes, de desarrollo sostenible. El adjetivo sostenible remite a lo siguiente: las intervenciones sobre el paisaje y el medioambiente de la generación actual, los que vivimos aquí y ahora, no deben hipotecar las posibilidades de vida y de disfrute de un medio ambiente habitable de las generaciones futuras.

Si incorporamos la variable tiempo futuro, que es lo que hace la noción de desarrollo sostenible correctamente entendida, lo que la supuesta “minoría social” que defiende la costa del suroeste tinerfeño es el derecho de una “inmensa mayoría” puesto que el legado de destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos y terrestres implicados supone una pérdida irreparable, primero, para la generación presente, que no ha reflexionado suficientemente, sobre todo sus políticos, sobre la pérdida de calidad de vida que generará tal infraestructura, pero, en segundo lugar y sobre todo, para las generaciones futuras de tinerfeños –nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y suma y sigue– que tendrán que habitar una isla incorrectamente gestionada desde el punto de vista del modelo de desarrollo basado en el cortoplacismo de una avariciosa y miope generación presente. El legado medioambiental empobrecido y viciado que deja la generación presente a las futuras es lo que queda ensombrecido en la discusión actual.

No se entiende por parte de políticos y comentaristas recién llegados a la cuestión ambiental que la inmensa mayoría son, en consecuencias, las generaciones futuras y que los llamados “ecologistas” son sólo los portavoces de los intereses

de unas personas que hayan nacido o no –nuestros niños y adolescentes y los futuros habitantes de la isla– son desestimados y borrados de las valoraciones electoralistas y “unánimes” sobre el llamado modelo de (sobre)desarrollo insular. El movimiento ecologista, existente desde los años sesenta en Europa y Estados Unidos, reclama para los que aún no tienen derecho a voto el derecho a una vida digna cuando les toque, en el futuro. Esta vida humana digna y decente depende de que nosotros, la generación actual, como gestores de la herencia común les dejemos una isla sostenible, esto es, un futuro en el que podrán disfrutar de los recursos naturales, pero, también del hermoso paisaje y la bendita biodiversidad que adorna nuestra morada atlántica.

El discurso político usa el término “desarrollo sostenible”, pero no lo entiende. Parte de la sociedad tinerfeña y, sobre todo, sus representantes electos, incluidos los responsables de la Consejería de Medio Ambiente, se pliegan a la miopía cortoplacista aliada del interés en el mero crecimiento económico que está demostrando, a lo largo de todo el país y teñido de corrupción, su carácter destructor. En Canarias, hoy por hoy, no se ha hecho el esfuerzo colectivo y público de entender qué es lo sostenible. La falta de ilustración ecológica, que no es otra cosa que egoísmo bien entendido, lleva a que nadie plantee en el terreno de la política “formal” y “electa” la necesidad de reorientar las estrategias públicas ambientales.

Una isla pequeña en extensión y sumamente frágil por lo limitado de sus recursos –el primero de ellos el mismo territorio y el patrimonio natural– que depende mayoritariamente de que los europeos –turistas alemanes e ingleses–, la encuentren agradable y bella no puede permitirse sumar infraestructuras nocivas e irracionales que ninguna previsión económica futura justifica. El quid de la cuestión es que el puerto de Santa Cruz es ampliable y ahí el daño a los ecosistemas ya está hecho. No se ha considerado esta alternativa y, a estas alturas del debate, sólo no quieren enterarse los que están comprometidos con intereses económicos o electorales. El hecho es que las cosas técnica y políticamente se han hecho muy mal: salga adelante el controvertido puerto o no salga. Voces técnicas cualificadas han sido acalladas, voces políticas discrepantes en la sociedad civil han sido descalificadas por políticos y medios de comunicación. La calidad de la democracia a la que se alude con el argumento de la unanimidad política de CC, PSC y PP franquea los mínimos y no es comparable con el tratamiento que a los proyectos con impacto ambiental se les da en muchos países europeos en donde se ha discutido el llamado Principio de Precaución. ¿Sabe alguno de nuestros políticos lo que

implica tal principio y qué papel juega en las Directivas Europeas? Desde luego aún no he escuchado a ninguno hacer referencia a él. La responsabilidad ambiental no entra, en Canarias, en la agenda política.

Por último, ¿Señor o Señora ciudadana, cuando fue usted a votar en las últimas elecciones autonómicas, le pidieron su opinión sobre el Puerto de Granadilla? La contestación a esta pregunta es “No”. La democracia no se puede entender como el otorgar una confianza absoluta a unos representantes, y menos después de la que está cayendo en cuanto a urbanismo y corrupción. Estos tienen la obligación de rendir cuentas, proyecto a proyecto, actuación a actuación, ante la ciudadanía. Tienen que tener buenas razones contrastadas en el debate público para las intervenciones propuestas y los proyectos y éstos deben ser medios adecuados de mejorar la calidad de vida, nunca para empeorarla. Por ejemplo, aunque haya dudas sobre el Tranvía que une Santa Cruz y La Laguna, si sirve para que un gran porcentaje de los que transitamos ese recorrido abandone el coche privado –y esto es lo que está por ver– será un gran avance en la búsqueda de un modo de vida sostenible que mejorará la circulación rodada y minimizará el impacto de las emisiones contaminantes a la atmósfera.

No se trata, como vocean algunos, de oponerse a todo, sino a lo que no está justificado con buenas razones y argumentos y no contempla el futuro como lo que es: un conjunto de incertidumbres económicas y políticas indescifrables ante el que se debe ser prudente y cauteloso. Mi opinión, después de dos años leyendo sobre el asunto, es que no hay buenas razones para el Puerto de Granadilla. Los políticos se legitiman o deslegitiman en el día a día, apostando por el bien general de la generación presente y de las futuras. Necesitan hacer bandera de la sensatez y no avalar macroproyectos desmedidos, titánicos y equivocados que se comerán presupuestos inauditos y desproporcionados. La historia no los absolverá, pero esto último no es un consuelo, porque el daño irreversible a la naturaleza y a los habitantes presentes y futuros de la isla estará hecho.

El haber desoído la Iniciativa Popular para la protección de la costa del Suroeste de Tenerife ha deslegitimado, de oficio, a la clase política canaria sentada en el Parlamento. No querer ni siquiera escuchar las razones de los discrepantes no es un hábito muy democrático que digamos. Los representantes de Coalición Canaria no quieren ni oír las razones y argumentos. No han querido entrar en el ejercicio deliberativo que la ciudadanía demanda sobre el proyecto. No entienden, además, que el nacionalismo en Canarias o es “eco-nacionalismo” o no es nada, porque nuestra mayor riqueza es el emplazamiento territorial donde la naturaleza nos ha colocado.

“Defender lo nuestro”, el eslogan nacionalista, es una consigna contradictoria con un modelo de (sobre)desarrollo económico miope y depredador. Si los paisajes se arruinan, los ecosistemas se destruyen, la biodiversidad se extingue y las islas se degradan irremediabilmente ¿qué sentido tiene el “nacionalismo canario”? ¿Cómo no han surgido voces en el nacionalismo gobernante defendiendo a la naturaleza y a las generaciones futuras de canarios?

Iniciativas como las torres de Vilaflor y el puerto de Granadilla los definen, contra lo que pretenden, como enemigos de lo “nuestro”. El “nuestro” no es sólo el de la generación presente que no ha sido consultada, sino, también, por supuesto, el de las generaciones futuras como vengo argumentando. A nadie se le ha ocurrido que si invirtiéramos un montante similar al destinado al Puerto en la llamada “sociedad del conocimiento” saldríamos de nuestro secular atraso en las nuevas autopistas de la información. ¿Por qué a nadie se le ocurre invertir en el chip y sí en el ladrillo?

Aunque con ocasión de la Iniciativa Popular, el PSC fue algo más sensible a la ciudadanía discrepante, la ausencia de una posición seria y coherente en torno a los límites del desarrollo económico para la Isla de Tenerife es patente en sus filas. Desde el punto de sus valores “progresistas”, no han entendido que Granadilla, como lo fue Vilaflor, es un hito decisivo en la construcción de la sociedad civil crítica de la isla porque representa, sumando protestas ciudadanas, que a los tinerfeños nos gustaría mejorar nuestra calidad de vida en términos ambientales y sociales y, no solamente económicos, con ganancias que sólo van a parar a una exigua minoría que amasa capitales desmedidos. Aunque con algunas divisiones, el actual responsable del PSC en Tenerife y alcalde de Adeje ha dejado claro que tenemos que “sacrificar” el medioambiente para tener más crecimiento económico. Lo escuché en una entrevista radiofónica cuando tomó las riendas del partido. La unanimidad de CC, PSC y PP reside en este axioma: sacrifiquemos y vendamos la naturaleza y la calidad de vida de los tinerfeños por un puñado de monedas hipotéticas en condiciones de competencia económica global durísimas y con una incertidumbre geopolítica irreductible respecto a África y al comercio mundial.

Hoy el ecologismo está globalizado y las asociaciones internacionales –sostenidas por muchos donantes y contribuyentes que piensan que la Tierra no se merece el maltrato al que la sometemos y financian *Greenpeace*, *WWF/Adena* o a *Ecologistas en Acción*– han apoyado a la “minoría” estigmatizada por el Gobierno y los medios de comunicación como díscolamente “ecologista”. La ciudadanía hoy aspira a la calidad de vida y a la conservación del menguante medioambiente

que aún nos queda. A las generaciones futuras no les podemos preguntar, pero les aseguro que nos les gustará contar con megaproyectos que arruinen el legado natural y que afeen el paisaje destrozando todo sentido de la belleza. Queremos ecodesarrollo y sostenibilidad.

En conclusión, la minoría ecologista es portavoz de la mayoría si introducimos en nuestros razonamientos morales y políticos a las futuras generaciones. ¡Que estas no nos tengan que maldecir! ¡Que nuestros descendientes no abominen de nosotros por haber destruido y dilapidado su herencia natural!

Por favor, recapaciten y ejerzan la higiene democrática escuchando alguna que otra vez las protestas razonadas y serias de la ciudadanía discrepante. Se lo agradeceríamos mucho. Tanta unanimidad en torno al modelo de (sobre)desarrollo economicista y miope es sospechosa. Sin discrepancia y oposición, sin debate participativo y deliberación colectiva, la democracia se convierte en letra muerta.

#### NOTA

<sup>1</sup> Este artículo fue publicado en el suplemento 2.C = *Revista Semanal de Ciencia y Cultura* (suplemento del periódico diario *La Opinión de Tenerife*).